

No. 44081

**Mexico
and
Uruguay**

Agreement between the United Mexican States and the Eastern Republic of Uruguay for the reciprocal promotion and protection of investments (with protocol). Montevideo, 30 June 1999

Entry into force: *7 July 2002 by notification, in accordance with article 13*

Authentic texts: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 16 July 2007*

**Mexique
et
Uruguay**

Accord entre les États-Unis du Mexique et la République orientale de l'Uruguay relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements (avec protocole). Montevideo, 30 juin 1999

Entrée en vigueur : *7 juillet 2002 par notification, conformément à l'article 13*

Textes authentiques : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 16 juillet 2007*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION
RECIPROCAS DE LAS INVERSIONES**

Los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Las Partes Contratantes";

Procurando intensificar la cooperación económica en beneficio de ambos países y, en particular, crear condiciones favorables para las inversiones por parte de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante,

Reconociendo que la promoción y protección recíprocas de dichas inversiones favorecen la expansión de las relaciones económicas entre ambos países y estimulan las iniciativas de inversión;

Han acordado lo siguiente

Artículo 1
Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo

1. El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido en actividades económicas por un inversor de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con las leyes y reglamentos de esta última, e incluye, en particular, aunque no exclusivamente

- a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, prendas y otros derechos similares,
- b) acciones, cuotas sociales o cualquier otra forma de participación en sociedades;

- c) títulos de crédito sobre dinero, obligaciones de sociedades o cualquier prestación que tenga valor económico asociada con una inversión;
- d) derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, secretos comerciales, conocimientos tecnológicos, "know how", valor llave (prestigio y clientela), que se encuentren asociados con una inversión;
- e) derechos derivados de concesiones económicas conferidas conforme a la ley o bajo contrato.

Un cambio en la forma en la cual se inviertan los activos no afectará su carácter de inversión, en tanto que dicho cambio esté comprendido en la definición anterior

Las transacciones comerciales diseñadas exclusivamente para la venta de bienes o servicios y créditos para financiar las transacciones comerciales con una duración menor a tres años, así como los créditos concedidos al Estado o a una empresa del Estado, no son considerados una inversión;

2. El término "rentas" significa los montos producidos por una inversión y, en particular, pero no exclusivamente, incluye utilidades, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías u honorarios,

3. El término "inversor" designa cualquier persona física o jurídica que invierta en el territorio de la otra Parte Contratante, entendiéndose por:

- a) "persona física", cualquier persona natural que tenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantes de conformidad con sus leyes,
- b) "persona jurídica", cualquier entidad constituida de conformidad y reconocida como tal por las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante.

Sin embargo, este Acuerdo no se aplicará a inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes.

4. El término "territorio" designa:

El territorio de cada Parte Contratante, incluyendo el mar territorial así como la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el subsuelo, respecto de los cuales cada Parte Contratante ejerce derechos de soberanía o jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

Artículo 2
Promoción y Admisión de las Inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes promoverá condiciones favorables para los inversores de la otra Parte Contratante a fin de invertir en su territorio y admitirá las inversiones de aquellos de acuerdo con su legislación.

2. Las Partes Contratantes de acuerdo con sus disposiciones legales, tramitarán con benevolencia las solicitudes de inmigración, residencia y permisos de trabajo del personal clave de una Parte Contratante que, en relación con una inversión, quiera entrar en el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 3
Tratamiento de las inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes otorgará a las inversiones realizadas y rentas recibidas por inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, un tratamiento justo y equitativo y no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas y rentas recibidas por sus propios inversores o a las inversiones realizadas y rentas recibidas por inversores de un tercer Estado, así como plena protección y seguridad.

2. Cada una de las Partes Contratantes otorgará un tratamiento justo y equitativo, así como plena protección y seguridad a los inversores de la otra Parte Contratante en relación a la administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en su territorio, y no menos favorable que el que otorga a sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado.

3 Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se interpretarán como la obligación de una de las Partes Contratantes a extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de un tratamiento, preferencia o privilegio resultante de.

- a) cualquier unión aduanera o zona de libre comercio o unión monetaria o acuerdo internacional similar tendiente a ese tipo de unión o institución u otras formas de cooperación regional, de las cuales las Partes Contratantes formen o pudieren formar parte;
- b) cualquier acuerdo internacional en materia impositiva o para evitar la doble tributación

Artículo 4 **Indemnización**

Cuando las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante sufran pérdidas por causa de guerra, conflicto armado, estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, revuelta u otro evento similar en el territorio de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última Parte Contratante un tratamiento, relativo a restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, no menos favorable que el que esta última Parte Contratante acuerde a sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado.

Artículo 5
Expropiación e Indemnización

1 Ninguna de las Partes Contratantes podrá, directa o indirectamente, nacionalizar o expropiar una inversión de un inversor de la otra Parte Contratante en su territorio, o adoptar cualquier otra medida equivalente a nacionalización o expropiación, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) que se adopte por causa de utilidad pública;
- b) que no sea discriminatoria;
- c) que sea de acuerdo con el debido proceso legal,
- d) que sea mediante indemnización, conforme a los párrafos 2 a 4 de este Artículo

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo ("fecha de expropiación") o antes de que la medida expropiatoria se hiciera pública. Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor fiscal declarado de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor de mercado

3. El pago de la indemnización se hará sin demora, será efectivamente liquidable o realizable y libremente transferible.

4. La cantidad pagada no será inferior a la cantidad equivalente que por indemnización se hubiese pagado en la fecha de expropiación en una divisa de libre conversión en el mercado financiero internacional y dicha divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de valuación, más los intereses correspondientes a una tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha de pago.

Artículo 6
Transferencias

1. Las Partes Contratantes permitirán la libre transferencia de las inversiones y las rentas. Las transferencias se harán en una moneda libremente convertible, sin restricción ni demora. Dichas transferencias incluirán, en particular, aunque no exclusivamente:

- a) el capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;
- b) las rentas;
- c) los fondos para el reembolso de los préstamos;
- d) el producto de la venta o liquidación de la inversión;
- e) los sueldos, salarios y demás remuneraciones recibidas por las personas físicas de una Parte Contratante por su trabajo o servicios realizados en la otra Parte Contratante en relación con una inversión.

2. A los efectos de este Acuerdo, el tipo de cambio será la tasa aplicable a las transacciones corrientes en la fecha de la transferencia.

3. Se considerará que las transferencias se han efectuado "sin demora", en el sentido del párrafo 1 de este Artículo, cuando se han hecho dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de la transferencia. Dicho plazo no excederá en ningún caso de dos meses, contado a partir del momento de la presentación de la solicitud correspondiente, si ésta fuere necesaria.

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este Artículo, una Parte Contratante podrá demorar o impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentos:

- a) para proteger los derechos de los acreedores, en cumplimiento de una resolución judicial,

- b) relativas a, o para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos:
 - (i) para la emisión, transmisión y negociación de valores, futuros, opciones y derivados,
 - (ii) concernientes a reportes o registros de transferencias, o
- c) relacionadas con infracciones penales y resoluciones en *procedimientos administrativos o de adjudicación*;

siempre que tales medidas y su aplicación no sean usadas como un medio para evadir el cumplimiento de los compromisos u obligaciones de las Partes Contratantes contenidas en el Acuerdo.

Artículo 7

Subrogación

1. En caso de que una Parte Contratante o la entidad por ella designada haya otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante y desde el momento en que la primera Parte Contratante o su entidad designada haya realizado pago alguno con cargo a la garantía concedida, la primera Parte Contratante o la entidad designada será beneficiaria directa de todo tipo de pagos a los que pudiese ser acreedor el inversor. En caso de controversia, únicamente el inversor podrá iniciar o participar en los procedimientos ante los tribunales nacionales o someterla a los tribunales de arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 del presente Acuerdo

Artículo 8
Solución de Controversias entre una Parte Contratante
y un Inversor de la otra Parte Contratante

1. Ambito de Aplicación y Derecho de Acción

A. Este Artículo se aplica a controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante, que surjan a partir de la fecha en la que el Acuerdo entre en vigor, respecto a un supuesto incumplimiento de una obligación de la primera, conforme a este Acuerdo, que ocasione una pérdida o daño al inversor o a su inversión. Una persona jurídica que es una inversión en el territorio de una Parte Contratante, hecha por un inversor de la otra Parte Contratante, no podrá someter reclamación alguna a arbitraje de acuerdo con este Artículo.

B. Si un inversor de una Parte Contratante o su inversión que es una persona jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante, inician procedimientos ante un tribunal nacional respecto a una medida que constituya un supuesto incumplimiento de este Acuerdo, la controversia no podrá someterse a arbitraje, de acuerdo con este Apéndice. Asimismo, en caso de que un inversor haya sometido la controversia a arbitraje internacional, la elección de ese procedimiento será definitiva. Las excepciones anteriores no aplican a procedimientos administrativos ante autoridades administrativas que ejecuten la medida presuntamente violatoria.

C. En caso de que un inversor de una Parte Contratante someta una reclamación a arbitraje, ni el inversor ni la persona jurídica, que es una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, podrán iniciar o continuar procedimientos ante un tribunal nacional.

2. Medios de Solución, Periodos de Tiempo

A. La controversia, de ser posible, deberá resolverse a través de la negociación o consulta. De no ser resuelta, el inversor podrá elegir someter la controversia a resolución

- a) de los tribunales competentes de la Parte Contratante que es parte en la controversia;
- b) de acuerdo con cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable previamente acordado, o
- c) de acuerdo con el Artículo a:
 - i) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("el Centro"), establecido de acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados ("el Convenio del CIADI") cuando ambas Partes Contratantes se hayan adherido al mismo;
 - ii) el Centro, conforme a las Reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro, si una de las Partes Contratantes, pero no ambas, es parte del Convenio del CIADI;
 - iii) un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI");
 - iv) la Cámara Internacional de Comercio, a un tribunal ad hoc, de acuerdo con sus reglas de arbitraje

B. Las reglas de arbitraje aplicables regirán al mismo, salvo en la medida de lo modificado por esta Sección

C. Una controversia puede ser sometida a resolución, de acuerdo con el párrafo 1, C, una vez que hayan transcurrido seis meses desde que los actos que motivan la reclamación tuvieron lugar, siempre que el inversor haya entregado a la Parte Contratante que es parte en la controversia, notificación por escrito de su intención de someter la reclamación a arbitraje por lo menos con 60 días de anticipación, y siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de 3 años a partir de la fecha en que el inversor por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia.

3. Consentimiento de la Parte Contratante

Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional al sometimiento de una controversia a arbitraje internacional de acuerdo con este Apéndice

4. Integración del Tribunal Arbitral

A. A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, el tribunal arbitral se integrará por tres miembros. Cada Parte en la controversia designará un miembro y éstos dos miembros, acordarán nombrar un tercer miembro como su presidente.

B. Los miembros de los tribunales arbitrales deberán tener experiencia en derecho internacional y en materia de inversión.

C. Si un tribunal arbitral no ha sido constituido dentro de un término de 90 días contado a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una de las partes contendientes no designó miembro o los miembros electos no llegaron a un acuerdo sobre el presidente, el Secretario General de la OEA, a petición de cualquiera de las partes contendientes, será invitado para nombrar, a su discreción,

al miembro o miembros aún no designados. No obstante, el Secretario General de la OEA, al momento de designar un presidente, deberá asegurarse de que el mismo no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes.

5. Acumulación

A. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y procederá de conformidad con lo establecido en dichas Reglas, salvo lo modificado por esta Sección

B. Los procedimientos se acumularán en los siguientes casos:

- a) cuando un inversor someta una reclamación en representación de una persona jurídica de la cual sea propietario o que esté bajo su control y, simultáneamente, otro inversor u otros inversores que participen en la misma persona jurídica, pero sin tener el control de ésta, sometan reclamaciones por cuenta propia como consecuencia de las mismas violaciones de este Acuerdo, o
- b) cuando dos o más reclamaciones son sometidas a arbitraje, derivadas de cuestiones comunes de hecho y de derecho.

C. El tribunal de acumulación decidirá la jurisdicción de las reclamaciones y revisará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo que determine que los intereses de cualquier parte contendiente son perjudicados.

6. Lugar del Arbitraje

Cualquier arbitraje conforme a este Artículo se realizará en un Estado que sea parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York). Las reclamaciones sometidas a arbitraje conforme a este Apéndice, se considerarán derivadas de una relación u operación comercial para los efectos del artículo 1 de la Convención de Nueva York.

7. Derecho Aplicable

Un tribunal establecido conforme a este Artículo decidirá la controversia de conformidad con este Acuerdo, con las reglas aplicables y con los principios del derecho internacional.

8. Laudos y Ejecución

A. Los laudos arbitrales pueden tomar las siguientes formas de resolución:

- a) una declaración de que la Parte Contratante ha incumplido con sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo;
- b) indemnización compensatoria, que debe incluir interés desde el momento en que se causen las pérdidas o daños hasta la fecha de pago;
- c) restitución en especie, en casos apropiados, salvo que la Parte Contratante pague en su lugar indemnización compensatoria, cuando la restitución no sea factible, y
- d) con el acuerdo de las partes contendientes, cualquier otra forma de resolución.

B. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente respecto de las partes contendientes y solamente con respecto al caso particular.

C. El laudo arbitral solamente será publicado si existe un convenio por escrito de ambas partes contendientes.

D. Un tribunal arbitral no podrá ordenar a una Parte Contratante el pago de daños punitivos.

E. Cada Parte Contratante deberá tomar, en su territorio, las medidas necesarias para la efectiva ejecución del laudo de acuerdo con lo establecido en este Artículo, y acatar sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte.

F. Un inversor podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral, conforme al Convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York

9. Exclusiones

El mecanismo de solución de controversias de este Artículo no será aplicable a las resoluciones adoptadas por una Parte Contratante, la cual, de acuerdo con su legislación y por razones de seguridad nacional, prohíban o restrinjan la adquisición por inversores de la otra Parte Contratante de una inversión en el territorio de la primera Parte Contratante que sea propiedad o esté controlada por sus nacionales.

Artículo 9 Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se solucionará, en lo posible, por consultas y negociaciones.

2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser solucionada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de solicitud de consultas, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral en los términos previstos en este Artículo.

3. El tribunal arbitral se establecerá para cada caso de la siguiente manera. dentro de los dos meses de recibida la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Esos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, de acuerdo con ambas Partes Contratantes, será designado presidente del tribunal. El presidente será designado dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de recibida la solicitud de arbitraje.

4 Si en los plazos referidos en el párrafo 3 de este Artículo las designaciones necesarias no se hubieran cumplido, cualquiera de las Partes Contratantes, en ausencia de cualquier otro acuerdo, invitará al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar las designaciones. Si el Presidente fuera un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si estuviera impedido de realizar dicha función, el Vicepresidente será invitado a efectuar las designaciones. Si el Vicepresidente fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si él también estuviera impedido de realizar dicha función, el integrante de mayor jerarquía de la Corte Internacional de Justicia que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes será invitado a realizar las designaciones.

5 El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos y determinará sus propios procedimientos, salvo que las Partes Contratantes acuerden en sentido diverso, y decidirá la controversia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y las reglas aplicables del derecho internacional. Dicha decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante se hará cargo de los honorarios de su miembro en el tribunal y de los gastos de representación en las actuaciones arbitrales, los honorarios del presidente, así como los demás gastos, se dividirán en partes iguales entre ambas Partes Contratantes. El Tribunal podrá, sin embargo, determinar que una mayor proporción de los gastos corra por cuenta de una de las Partes Contratantes, y esta decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.

6 Una Parte Contratante no podrá iniciar procedimientos de acuerdo con este Artículo por una controversia relativa a la violación de los derechos de un inversor, la cual haya sido sometida por dicho inversionista a los procedimientos conforme al Artículo 8 de este Acuerdo, a menos que la otra Parte Contratante incumpla o no acate el laudo dictado en dicha controversia. En este caso, el tribunal arbitral establecido de conformidad con este Artículo, ante la presentación de una solicitud de la Parte Contratante cuyo inversionista fue parte en la controversia, podrá ordenar:

- a) una declaración de que el incumplimiento o desacato del laudo definitivo está en contravención a las obligaciones de la otra Parte Contratante de conformidad con este Acuerdo, y

- b) una recomendación de que la otra Parte Contratante cumpla y acate el laudo definitivo.

Artículo 10
Requisitos de Información

No obstante lo dispuesto en este Acuerdo, las Partes Contratantes podrán exigir de un inversor de la otra Parte Contratante o de la persona jurídica en la que ha invertido en su territorio, que proporcione información rutinaria referente a esa inversión, exclusivamente con fines de información estadística. La Parte Contratante protegerá la información que sea confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva de la inversión o del inversor

Artículo 11
Aplicación del Acuerdo

El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero sus disposiciones no se aplicarán a controversia, reclamo o diferendo alguno que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor.

Artículo 12
Aplicación de otros Acuerdos Internacionales

Si un asunto estuviera regido simultáneamente por este Acuerdo y por otro acuerdo internacional al que ambas Partes Contratantes se hubieran adherido, nada en este Acuerdo impedirá que cualquiera de las Partes Contratantes o uno de sus inversores que sean propietarios de inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, se beneficien de cualquier norma que les sea más favorable.

Artículo 13
Entrada en Vigor, Duración y Terminación

1 Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la última fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito que han cumplido los requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo. La última fecha hace referencia a la fecha de remisión de la última carta de notificación.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez (10) años y su vigencia se extenderá automáticamente por otro período equivalente, salvo que una de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante su intención de terminarlo un año antes de finalizar el período de diez años que corresponda

3. Con relación a las inversiones realizadas o adquiridas con anterioridad a la fecha de terminación de este Acuerdo, las disposiciones de todos los demás Artículos del mismo continuarán en vigor por un período de diez (10) años a partir de dicha fecha de terminación.

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo,

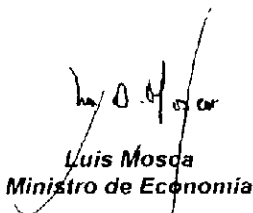
Hecho en en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los treinta días del mes de junio de 1999, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos

**POR LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS**



**Herminio Blanco Mendoza
Secretario de Comercio y
Fomento Industrial**

**POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY**



**Luis Mosca
Ministro de Economía**

PROTOCOLO

En el acto de la firma del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay para la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, los suscritos plenipotenciarios han acordado adicionalmente las siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integrante de dicho Acuerdo

Ad Artículo 1, párrafo 1, c)

Con respecto a las disposiciones de este Artículo, y en relación a los Estados Unidos Mexicanos, los préstamos estarán incluidos en la definición de inversión solamente cuando sean otorgados por el inversor a la explotación que constituye su inversión o bien resulten de una operación financiera contratada por un periodo superior a tres años

Ad Artículo 6

En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza del mismo, los Estados Unidos Mexicanos podrán temporalmente restringir las transferencias, siempre y cuando se instrumenten medidas o un programa de acuerdo con los estándares del Fondo Monetario Internacional. Estas restricciones se impondrán sobre bases equitativas, no discriminatorias y de buena fe

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES AND THE
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON THE RECIPROCAL PRO-
MOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The United Mexican States and the Oriental Republic of Uruguay, hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

Endeavouring to intensify economic cooperation to the benefit of both countries and, in particular, to create favourable conditions for investment by investors from one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognising that the reciprocal promotion and protection of said investments favours the expansion of economic relations between the two countries and stimulates investment initiatives;

Have agreed the following:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested in economic activities by an investor of one of the Contracting Parties in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations of the latter, and shall include, in particular, though not exclusively:

- a) Movable and immovable property, as well as other rights in rem such as mortgages, liens, pledges and other similar rights;
- b) Shares, membership interests or any other form of participation in companies;
- c) Credit instruments on money, corporate bonds or any other lending associated with an investment that may have economic value;
- d) Intellectual or industrial property rights, including copyright, patents, brands, trade names, industrial designs, commercial secrets, technological knowledge, "know-how", goodwill (prestige and clientele), that may be associated with an investment;
- e) Rights derived from economic concessions conferred in accordance with the law or under contract;

A change in the manner in which assets are invested shall not affect their status as investments, provided that such a change is covered by the above definition.

Commercial transactions designed exclusively for the sale of goods or services and credits to finance commercial transactions with a duration of less than three years, as well as credits granted to the state or to a State enterprise, shall not be considered investments.

2. The term "income" shall mean the amounts generated by an investment and, in particular, though not exclusively, shall include profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

3. The term "investor" shall mean any physical or legal person who invests in the territory of the other Contracting Party, with:

a) "Physical person" meaning any natural person who is a national of one of the Contracting Parties in accordance with its laws;

b) "Legal person" meaning any entity constituted in accordance with, and recognised as such by, the laws and regulations of one Contracting Party and which has its headquarters in the territory of said Contracting Party.

This Agreement, however, shall not apply to investments made by physical persons who are nationals of both Contracting Parties.

4. The term "territory" shall mean:

The territory of each Contracting Party, including territorial seas, as well as the exclusive economic zone, the continental shelf and subsoil, in respect of which each Contracting Party exercises rights of sovereignty and jurisdiction, in accordance with international law.

Article 2. Promotion and admission of investment

1. Each of the Contracting Parties shall promote favourable conditions for investors of the other Contracting Party for the purpose of investing in its territory, and shall admit the investments of said investors in accordance with its legislation.

2. The Contracting Parties, in accordance with their legal provisions, shall be well-disposed towards processing the immigration, residency and work permit applications of key personnel of a Contracting Party who, with regard to an investment, should wish to enter the territory of the other Contracting Party.

Article 3. Treatment of investments

1. Each of the Contracting Parties shall treat the investments made and income received by investors of the other Contracting Party in its territory in a fair and equitable manner and no less favourably than the treatment accorded to the investments made and income received by its own investors or to the investments made and income received by investors of a third State, as well as full protection and security.

2. Each of the Contracting Parties shall treat the investors of the other Contracting Party in a fair and equitable manner, as well as accord them full protection and security, in relation to the administration, maintenance, use, enjoyment or disposal of such investments in its territory, and in a no less favourable manner than the treatment accorded to its own investors or to the investors of a third State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be interpreted as an obligation on the part of one of the Contracting Parties to extend to the investors of the other Contracting Party the benefits of a treatment, preference or privileges resulting from:

a) Any customs union or free trade zone or monetary union or similar international agreement tending towards such a union or institution or other forms of regional cooperation of which the Contracting Parties form part or may form part;

b) Any international agreement on the subject of taxation or the avoidance of double taxation.

Article 4. Indemnification

Where the investments made by investors of a Contracting Party may suffer losses owing to war, armed conflict, state of national emergency, revolution, insurrection, revolt or similar event in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than would be accorded by this latter Contracting Party to its own investors or to investors of a third State.

Article 5. Expropriation and Indemnification

1. Neither of the Contracting Parties shall, directly or indirectly, nationalise or expropriate an investment of an investor of the other Contracting Party in its territory, nor adopt any other measure equivalent to nationalisation or expropriation, unless the following conditions are met:

- a) The measures are taken for reasons of public interest;
- b) The measures are not discriminatory;
- c) The measures are in accordance with the due legal process;
- d) The measures are accompanied by indemnification, in accordance with paragraphs 2 to 4 of this Article.

2. Indemnification shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation measure is carried out ("date of expropriation"), or before the expropriation measure is made public. The valuation criteria shall include the current value, the declared fiscal value of tangible goods, as well as other criteria that may be appropriate for determining market value.

3. Indemnification shall be paid without delay, shall be effectively liquefiable or realizable and freely transferable.

4. The amount paid shall not be less than the equivalent amount that would have been paid in compensation on the date of expropriation in a currency freely convertible on the international financial markets and had said currency been exchanged at the market rate applicable on the date of valuation, plus interest corresponding to a reasonable commercial rate for said currency until the date of payment.

Article 6. Transfers

1. The Contracting Parties shall allow the free transfer of investments and income. Transfer shall be made in a freely convertible currency, without restriction or delay. Said transfers shall include, in particular, but not exclusively:

- a) The capital and additional sums necessary to maintain and develop the investments;
- b) Income;

- c) Funds for the repayment of loans;
- d) The proceeds of the sale or liquidation of the investment;
- e) The salaries, wages and other remuneration received by the physical persons of a Contracting Party for their work or services carried out in the other Contracting Party in relation to an investment.

2. For the purposes of this Agreement, the exchange rate shall be the rate applicable to the current transactions on the date of the transfer.

3. Transfers shall be considered to have been carried out "without delay", in the sense of paragraph 1 of this Article, where they have been carried out within the period normally necessary to comply with the formalities of the transfer. Such period shall in no instance exceed two months, counted from the time of submission of the corresponding transfer request, should the latter be necessary.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, a Contracting Party may delay or prevent a transfer by means of the application, in good faith and in an equitable and non-discriminatory manner, of its laws and regulations:

- a) To protect the rights of creditors, in compliance with a judicial ruling;
- b) Relative to, or to ensure compliance with the laws and regulations:
 - (i) For the issuance, transfer and negotiation of securities, futures, options and derivatives;
 - (ii) Concerning the reporting or registering of transfers; or
- c) Related to criminal violations and rulings in administration or adjudication procedures;

Always to the extent that such measures and their application are not used as means to avoid compliance with the commitments and obligations of the Contracting Parties under in this Agreement.

Article 7. Subrogation

1. In the event of a Contracting Party or an entity designated by said Contracting Party having granted a financial guarantee relative to non-commercial risks in respect of an investment made by its investors in the territory of the other Contracting Party, and from the moment when the first Contracting Party or its designated entity were to have made a payment charged to the guarantee issued, the first Contracting Party or designated entity shall be the direct beneficiary of any kind of payment for which the investor might be a creditor. In the case of a dispute, the investor alone shall be able to initiate or participate in the proceedings before the national courts or submit said dispute to the international arbitral tribunals, in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement.

Article 8. Settlement of Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Scope of Application and Right of Action

A. This Article shall apply to disputes between a Contracting Party and an investor from the other Contracting Party that may arise from the date of entry into force of the

Agreement, in respect of an alleged failure to comply with an obligation on the part of the former, in accordance with this Agreement, that causes a loss or damage to the investor or to his investment. A legal person that is an investment in the territory of a Contracting Party, made by an investor of the other Contracting Party, may not submit any claim to arbitration in accordance with this Article.

B. If an investor from a Contracting Party or his investment, which is a legal person in the territory of the other Contracting Party, initiate proceedings before a national court in respect of a measure that constitutes an alleged failure to comply with this Agreement, the dispute may not be submitted to arbitration, in accordance with this appendix. Likewise, in the event that an investor has submitted the dispute to international arbitration, the choice of this procedure shall be final. The aforementioned exceptions shall not apply to administrative procedures before administrative authorities executing the measure allegedly in violation of this Agreement.

C. In the event that an investor from a Contracting Party were to submit a claim to arbitration, neither the investor nor the legal person, which is an investment in the territory of the other Contracting Party, may initiate or continue proceedings before a national court.

2. Means of Settlement and Timescales

A. The dispute, where possible, shall be resolved through negotiation or consultation. If unresolved, the investor may choose to submit the dispute to a ruling:

- a) By the competent courts of the Contracting Party that is a party in the dispute;
- b) In accordance with any applicable procedure for the settlement of disputes agreed previously; or
- c) In accordance with the Article to:
 - i) The International Centre for Settlement of Investment Disputes ("the Centre"), established in accordance with the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States ("the Convention of the ICSID") where both Contracting Parties adhere to the latter;
 - ii) The Centre, in accordance with the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the Centre, if one of the Contracting Parties, but not both, is party to the Convention of the ICSID.
 - iii) An ad hoc arbitral tribunal, established in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law ("UNCITRAL");
 - iv) The International Chamber of Commerce, to an ad hoc tribunal, in accordance with its arbitration rules.

B. The arbitration rules applicable shall govern such arbitration, save as modified by this Section.

C. A dispute may be submitted for resolution, in accordance with paragraph 1.C, once six months have elapsed from when the acts took place that gave rise to the claim, provided that the investor has delivered to the Contracting Party that is a party in the dispute, at least 60 days in advance, written notification of his intention to submit the claim to arbitration, and provided that a period of 3 years has not elapsed from the date on

which the investor first had, or should have had, knowledge of the acts that gave rise to the dispute.

3. Consent of the Contracting Party

Each Contracting Party grants its unconditional consent to a dispute being submitted to international arbitration in accordance with this Appendix.

4. Composition of the Arbitral Tribunal

A. Unless the disputing parties decide otherwise, the arbitral tribunal shall comprise three members. Each Party in the dispute shall nominate one member and these two members shall nominate a third member as their president.

B. The members of the arbitral tribunals shall have experience in international law and on the subject of investment.

C. If an arbitral tribunal has not been set up within a period of 90 days from the date on which the claim was submitted to arbitration, be it because the Contracting Parties did not nominate a member, or because the members appointed failed to agree on the president, the Secretary-General of the OAS, at the request of either of the disputing parties, shall be invited to nominate, at his discretion, the member or members yet to be appointed. The Secretary-General of the OAS, however, at the time of appointing a president, shall ensure that the latter is not a national of either of the Contracting Parties.

5. Consolidation

A. A consolidation tribunal established in accordance with this Article shall be set up according to the Arbitration Rules of the UNCITRAL and shall proceed as stipulated by said Rules, save as modified by this Section.

B. The proceedings shall be consolidated in the following instances:

a) Where an investor, representing a legal person of which he is owner or which is under his control, submits a claim and, simultaneously, another investor or other investors who participate in the same legal person, but without controlling it, submit, of their own accord, claims as a result of the same violations of this Agreement; or

b) Where two or more claims are submitted to arbitration, deriving from common questions of law and fact.

C. The consolidation tribunal shall decide the jurisdiction of the claims and shall review jointly said claims, save if it should determine that the interests of any disputing party have been prejudiced.

6. Place of Arbitration

Any arbitration in accordance with this Article shall take place in a State that is party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). Claims submitted to arbitration in accordance with this Appendix shall be considered derived from a commercial relationship or operation for the purposes of Article 1 of the New York Convention.

7. Applicable Law

A tribunal established in accordance with this Article shall settle the dispute in accordance with this Agreement, the applicable rules and the principles of international law.

8. Awards and Execution

A. The arbitral awards may take the following forms of settlement:

a) A declaration to the effect that the Contracting Party has failed to comply with its obligations in accordance with this Agreement;

b) Compensatory damages, which must include interest from the moment that the losses or damages were caused until the date of payment;

c) Restitution in kind, in appropriate cases, save if the Contracting Party pays compensatory damages instead, where restitution is not feasible; and

d) With the agreement of the disputing parties, any other form of settlement.

B. Arbitral awards shall be final and binding only with respect to the disputing parties and only with respect to the particular case.

C. The arbitral award shall only be published if an agreement in writing by both disputing parties exists.

D. An arbitral tribunal may not order a Contracting Party to pay punitive damages.

E. Each Contracting Party shall take, in its territory, the necessary measures for the effective execution of the award in accordance with the provisions of this Article, and shall observe without delay any award issued in proceedings of which it is a party.

F. An investor may appeal against the execution of an arbitral award, in accordance with the Convention of the ICSID or the New York Convention.

9. Exclusions

The mechanism for the settlement of disputes of this Article shall not apply to the decisions adopted by a Contracting Party, which, in accordance with its legislation and for reasons of national security, prohibit or restrict the acquisition by investors of the other Contracting Party of an investment in the territory of the first Contracting Party that is the property of or controlled by its nationals.

Article 9. Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute between the Contracting Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved, where possible, through consultations and negotiations.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be resolved within the six months following the date of the request for consultations, it shall be submitted, at the request of either of the Contracting Parties, to an arbitral tribunal on the terms stipulated in this Article.

3. The arbitral tribunal shall be established in each case in the following manner: within two months of receipt of the arbitration request, each Contracting Party shall nominate a member of the tribunal. These two members shall elect a national of a third State who, in agreement with both Contracting Parties, shall be designated president of the tribunal. The president shall be appointed within four months from the date of receipt of the arbitration request.

4. If within the timescales referred to in paragraph 3 of this Article the necessary nominations should not have been made, either of the Contracting Parties, in the absence of any other agreement, shall invite the President of the International Court of Justice to make the appointments. If the President were to be a national of either of the Contracting

Parties or he were otherwise prevented from carrying out said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President were to be a national of either of the Contracting Parties or if he were also otherwise prevented from carrying out said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either of the Contracting Parties shall be invited to make the appointments.

5. The arbitral tribunal shall take its decision by a majority of votes and shall lay down its own procedure, save where the Contracting Parties agree differently, and shall settle the dispute in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules of international law. Said decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the fees of its member in the tribunal and the expenses connected with representing it in the arbitration proceedings; the fees of the president, as well as the other expenses, shall be divided equally between both Contracting Parties. The tribunal may, however, rule that a greater proportion of the expenses shall be borne by one of the Contracting Parties, and this decision shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall lay down its own procedure.

6. A Contracting Party may not initiate proceedings in accordance with this Article regarding a dispute, related to a violation of the rights of an investor, which has been submitted by said investor to the proceedings under Article 8 of this Agreement, unless the other Contracting Party fails to comply with or does not respect the award issued in said dispute. In that case, the arbitral tribunal established in accordance with this Article, upon presentation of a request by the Contracting Party whose investor was a party in the dispute, may order:

a) A declaration to the effect that the failure to comply with or respect the final award contravenes the obligations of the other Contracting Party in accordance with this Agreement, and

b) A recommendation that the other Contracting Party should comply with and respect the final award.

Article 10. Requests for Information

Notwithstanding the provisions of this Agreement, the Contracting Parties may require an investor of the other Contracting Party, or the legal person in which said investor has invested in its territory, to provide routine information with regard to that investment, solely for the purposes of statistical information. The Contracting Party shall protect information of a confidential nature from any disclosure that could negatively affect the investment's or investor's competitive situation.

Article 11. Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments carried out prior to or after the date of its entry into force. However, its provisions shall not apply to any disputes, claims or disagreements that have arisen prior to its entry into force.

Article 12. Application of other International Agreements

If a matter were to be governed simultaneously by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are party, nothing in this Agreement shall prevent either of the Parties, nor one of their investors who is the owner of investments in the territory of the other Contracting Party, from benefiting from any rule that might be more favourable to them.

Article 13. Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the last date on which the Contracting Parties shall have notified each other, in writing, of having complied with the constitutional requirements for this Agreement to enter into force. The last date refers to the date when the last letter of notification was sent.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall be extended automatically for another equivalent period, save if one of the Contracting Parties were to notify the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement one year before the end of the corresponding ten-year period.

3. With regard to the investments made or acquired prior to the termination date of this Agreement, the provisions of all the other Articles of the latter shall remain in force for a period of ten (10) years from said termination date.

In Witness Whereof, the undersigned, duly authorised, sign this Agreement.

Done in the city of Montevideo, Uruguay, on 30 June 1999, in two copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the United Mexican States:
HERMINIO BLANCO MENDOZA
Secretary of Commerce and Industrial Development

For the Oriental Republic of Uruguay:
LUIS MOSCA
Minister of Economy

PROTOCOL

In the act of signing the Agreement between the United Mexican States and the Oriental Republic of Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, the undersigned plenipotentiaries have agreed, in addition, the following provisions, which shall be considered an integral part of said Agreement:

Ad Article 1, paragraph 1. c)

With regard to the provisions of this Article, and in relation to the United Mexican States, loans shall be included in the definition of an investment only when they are granted by the investor for the operations that comprise his investment or which may result from a financial operation contracted for a period of more than three years.

Ad Article 6

In the event of a fundamental imbalance in the balance of payments or a threat thereof, the United Mexican States may temporarily restrict transfers, provided that measures or a programme are implemented in accordance with the standards of the International Monetary Fund. Such restrictions shall be imposed on an equivalent, non-discriminatory basis and in good faith.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Les États-Unis du Mexique et la République orientale de l'Uruguay, ci-dessous dénommés « les Parties contractantes »;

Désireux d'intensifier la collaboration économique dans l'intérêt des deux États et, en particulier, de créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques desdits investissements encouragent le développement des relations économiques entre les deux pays et stimulent les initiatives d'investissement;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les types d'actifs investis dans des activités économiques par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie, conformément aux lois et règlements de cette dernière, et inclut notamment, mais non exclusivement :

- a) La propriété de biens meubles et d'autres droits réels tels qu'hypothèques, gages, taxes et autres droits similaires;
- b) Les actions, parts sociales ou toute autre forme de participation dans des sociétés;
- c) Les titres de créance, obligations de sociétés ou toute autre prestation ayant une valeur économique et associée à un investissement;
- d) Les droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits d'auteur, brevets, marques, dénominations commerciales, dessins industriels, secrets commerciaux, connaissances technologiques, connaissances techniques (know how), valeurs fondamentales (prestige et clientèle) associés à un investissement;
- e) Les droits découlant de concessions économiques accordées conformément aux dispositions de la loi ou sous contrat.

Les modifications de la forme d'investissement des actifs n'affectent pas leur qualification d'investissement, à condition que ces modifications soient incluses dans la définition qui précède.

Ne sont toutefois pas considérés comme des investissements les opérations commerciales visant exclusivement la vente de biens ou de services, les crédits destinés à financer des opérations commerciales d'une durée de moins de trois ans ni les crédits accordés à l'État ou à une entreprise d'État.

2. Le terme « revenus » désigne les montants rapportés par un investissement et inclut notamment, mais non exclusivement, les participations aux bénéfices, dividendes, intérêts, redevances, plus-values de capitaux ou autres rémunérations.

3. Le terme « investisseur » désigne toute personne physique ou morale qui investit sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément aux définitions suivantes :

a) « Personne physique » : tout individu ayant la nationalité de l'une des Parties contractantes, au titre des dispositions prévues par la loi;

b) « Personne morale » : toute entité constituée conformément aux dispositions législatives et règlements de l'une des Parties contractantes et reconnue comme telle, et qui a son siège sur le territoire de ladite Partie contractante.

Cet Accord ne s'applique cependant pas aux investissements réalisés par des personnes physiques ayant la nationalité des deux Parties contractantes.

4. Le terme « territoire » désigne :

Le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris sa mer territoriale, sa zone économique exclusive, le plateau continental et le sous-sol, sur lesquels chacune des Parties contractantes exerce ses droits souverains et sa juridiction, au titre des dispositions du droit international.

Article 2. Promotion et admission des investissements

1. Chacune des Parties contractantes s'efforce de créer des conditions favorables aux investisseurs de l'autre Partie qui souhaitent investir sur son territoire, et admet lesdits investissements, conformément à ses dispositions juridiques en vigueur.

2. Les Parties contractantes, conformément à leurs dispositions juridiques en vigueur, transmettent avec diligence les demandes d'immigration, de résidence et de permis de travail du personnel principal de l'une des Parties contractantes qui désire entrer sur le territoire de l'autre Partie, dans le cadre d'une activité d'investissement.

Article 3. Traitement des investissements

1. Chacune des Parties contractantes assure aux investissements réalisés sur son territoire et aux sommes investies par des investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, non moins favorable que celui qu'il accorde aux investissements et sommes reçues de ses propres investisseurs ou d'investisseurs originaires de tout autre État tiers, ainsi que protection et sécurité.

2. Chacune des Parties contractantes accorde un traitement juste et équitable, ainsi que protection et sécurité, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'exploitation, la jouissance, la cession ou la liquidation des investissements réalisés sur son territoire, traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre État tiers.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article n'obligent toutefois pas les Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice d'un régime, préférence ou privilège résultant de :

a) Toute union douanière, zone de libre-échange, union monétaire, accord international similaire à ce type d'union ou d'institution ou toute autre forme de coopération régionale, dont les Parties contractantes font ou pourraient faire partie;

b) Tout accord international en matière fiscale ou accord visant à éviter la double imposition.

Article 4. Indemnisation

Lorsque les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes subissent un préjudice du fait d'une guerre ou d'un conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une insurrection, d'une révolte ou de tout autre événement similaire ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils bénéficient de la part de cette autre Partie contractante d'un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs d'autres États tiers, en matière de restitutions, d'indemnisations, de compensations ou de tout autre arrangement similaire.

Article 5. Expropriation et indemnisation

1. Aucune des Parties contractantes ne peut, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement réalisé par un investisseur de l'autre Partie sur son territoire, ou adopter d'autres mesures analogues à l'expropriation ou à la nationalisation, à moins :

a) Qu'elles ne soient adoptées pour cause d'utilité publique;

b) Qu'elles ne soient pas discriminatoires;

c) Qu'elles soient adoptées au terme d'une procédure juridique équitable; et

d) Qu'elles ne soient réalisées moyennant indemnité, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.

2. L'indemnité doit être équivalente à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la mesure d'expropriation a été réalisée (« date d'expropriation ») ou avant la date à laquelle cette mesure a été rendue publique. Les critères d'évaluation incluent la valeur courante, la valeur fiscale déclarée des biens matériels, ainsi que d'autres critères pouvant servir à déterminer la valeur marchande.

3. L'indemnité est acquittée sans délai, est effectivement réalisable et librement transférable.

4. La somme versée n'est pas inférieure à la somme équivalente qui aurait été payée à des fins d'indemnisation à la date d'expropriation, en devise convertible sur le marché financier international, convertie selon le taux de change en vigueur à cette date, en plus des intérêts correspondant à un taux commercial normal pour cette devise jusqu'à la date de son paiement.

Article 6. Transferts

1. Les Parties contractantes garantissent le libre transfert de tous les revenus et investissements. Les transferts sont effectués en devise convertible, sans délai ni restriction. Ces transferts incluent notamment :

a) Le capital et les apports supplémentaires nécessaires pour entretenir ou accroître l'investissement;

b) Les revenus;

c) L'amortissement des prêts;

d) Le produit de la cession ou de la liquidation de l'investissement;

e) Les salaires, indemnités et autres rémunérations reçues par les personnes physiques de l'une des Parties contractantes pour leur travail ou services prestés sur le territoire de l'autre Partie contractante, dans le cadre d'une activité d'investissement.

2. Aux fins du présent Accord, le taux de change est le taux applicable sur le marché aux transactions courantes à la date du transfert.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les transferts sont considérés comme réalisés « sans délai » lorsqu'ils sont effectués dans le délai raisonnable nécessaire pour remplir toutes les formalités de transfert. Ce délai ne dépasse en aucun cas les deux mois à partir du moment de la présentation de la demande correspondante, le cas échéant.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une Partie contractante peut retarder ou empêcher la réalisation d'un transfert lorsqu'elle applique, de bonne foi et sans discrimination, ses lois et règlements relatifs :

a) À la protection des droits des créanciers, suite à une décision judiciaire;

b) À l'exécution de ses lois et règlements relativement :

i) À l'émission, la cession et la négociation de valeurs, les contrats à terme, options et dérivés;

ii) Au report ou à l'enregistrement de transferts ou;

c) Aux infractions pénales et aux décisions en matière administrative ou d'adjudication;

À condition que ces mesures et leur application ne soient pas utilisées comme un moyen pour contourner les engagements et obligations des Parties contractantes en vertu du présent Accord.

Article 7. Subrogation

Si l'une des Parties contractantes ou une entité désignée par celle-ci a octroyé une garantie financière relative aux risques non commerciaux dans le cadre d'un investissement réalisé par ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, et à partir du moment où la première Partie contractante ou son entité désignée ont réalisé un paiement relatif à la garantie octroyée, la première Partie contractante ou l'entité désignée bénéficie directement de tout type de paiement pour lesquels l'investisseur pourrait être créancier. En cas de litige, seul l'investisseur peut initier ou participer aux procédures de

vant les tribunaux nationaux, ou s'adresser aux tribunaux d'arbitrage international, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord.

Article 8. Règlement de litiges entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante

1. Champ d'application et droit d'action

A. Le présent article s'applique aux litiges qui surviennent, après l'entrée en vigueur du présent Accord, entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante quant à l'inexécution alléguée par la Partie contractante d'une obligation prévue par le présent Accord, qui aurait causé une perte ou un préjudice à l'investisseur ou à son investissement. Cet article n'habilite pas la personne morale qui constitue l'investissement sur le territoire de l'une des Parties contractantes de l'investisseur de l'autre Partie contractante à soumettre une revendication à l'arbitrage.

B. Si un investisseur de l'une des Parties contractantes ou la personne morale qui constitue son investissement sur le territoire de l'autre Partie, entament des procédures devant un tribunal national relativement à une inexécution alléguée d'une obligation prévue au titre du présent Accord, le litige ne pourra être soumis à l'arbitrage, conformément aux dispositions de la présente section. De la même façon, si un investisseur a soumis le litige à une instance d'arbitrage international, le choix de cette procédure sera définitif. Les exceptions antérieures ne s'appliquent pas aux procédures administratives devant les autorités administratives qui exécutent la mesure dite discriminatoire.

C. Si l'investisseur d'une Partie contractante soumet une réclamation d'arbitrage, ni l'investisseur ni la personne morale qui constitue un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peuvent initier ou poursuivre des procédures devant un tribunal national.

2. Moyens de règlement et délais

A. Le litige doit être réglé, tant que possible, par la voie de négociations ou de consultations.

Si le litige n'est pas réglé par ces moyens, l'investisseur peut décider de soumettre le litige pour règlement :

- a) Aux tribunaux compétents de la Partie contractante qui est partie au litige;
- b) À toute procédure applicable préalablement convenue pour le règlement des litiges;
- c) En application du présent article point a) :
 - i) Au Centre international pour le règlement des litiges relatifs aux investissements (le « Centre ») créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la « Convention du CIRDI »), si les deux Parties contractantes sont parties à la Convention du CIRDI;
 - ii) Au Centre, en conformité avec les règles régissant la Facilité additionnelle du CIRDI (mécanisme complémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du Centre), lorsque seule l'une des Parties contractantes est partie à la Convention du CIRDI;

iii) À un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi en conformité avec le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (la « CNUDCI »);

iv) À la Chambre de commerce internationale ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc, en conformité avec ses règles d'arbitrage.

B. Les règles d'arbitrage applicables régissent l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

C. Un litige peut être soumis aux fins de règlement, en application du paragraphe 1. C. du présent article, dès lors que six mois se sont écoulés depuis que se sont produits les faits donnant lieu à la réclamation, à condition que l'investisseur ait notifié par écrit à la Partie contractante partie au litige, avec un préavis d'au moins 60 jours, son intention de soumettre une affaire à l'arbitrage, mais avant que ne se soient écoulées trois années depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits qui donnent lieu au litige.

3. Consentement de la Partie contractante

Chacune des Parties contractantes consent sans condition à soumettre tout litige à l'arbitrage international en conformité avec la présente section.

4. Constitution du tribunal d'arbitrage

A. À moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque Partie au litige désigne un membre. Ces membres désignent, à leur tour, un troisième membre en tant que président.

B. Les membres des tribunaux d'arbitrage doivent posséder une expérience en droit international et en matière d'investissements.

C. Si le tribunal d'arbitrage n'est pas constitué dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le litige a été soumis à l'arbitrage, soit parce que l'une des Parties au litige n'a pas désigné de membre, soit parce que les membres nommés ne se sont pas mis d'accord sur un président, le Secrétaire général de l'OEA, agissant à la demande de l'une ou l'autre des Parties au litige, désigne à sa discrétion le ou les membres non encore désignés. Néanmoins, en désignant un président, le Secrétaire général de l'OEA veille à ce que ledit président ne soit pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

5. Jonction d'instances

A. Tout tribunal de jonction d'instances établi conformément au présent article est régi par les règles d'arbitrage de la CNUDCI et procède en conformité avec les dispositions des dites règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.

B. Il y a jonction d'instances dans les cas suivants :

a) Lorsqu'un investisseur soumet une réclamation au nom d'une personne morale dont il est propriétaire ou qu'il contrôle et, simultanément, un ou plusieurs autres investisseurs qui ont des parts dans la même personne morale mais sans la contrôler, soumettent des réclamations en leur nom propre relativement aux mêmes infractions au présent Accord, ou

b) Lorsqu'au moins deux litiges portant sur des points communs de fait ou de droit sont soumis à l'arbitrage.

C. Le tribunal de jonction d'instances décide de la juridiction à laquelle ressortissent les litiges et réexamine conjointement ces litiges, à moins qu'il n'établisse que les intérêts de l'une ou l'autre des Parties au litige ne subissent un préjudice.

6. Lieu de l'arbitrage

Tout arbitrage réalisé conformément aux dispositions du présent article doit se tenir dans un État Partie à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (« Convention de New York »). En conformité avec la présente section, tout litige soumis à l'arbitrage est réputé découler d'une relation ou d'une opération commerciale aux fins de l'article premier de la Convention de New York.

7. Droit applicable

Tout tribunal établi conformément aux dispositions du présent article juge les litiges conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux règles applicables et principes du droit international.

8. Sentences d'arbitrage et exécution

A. Les sentences d'arbitrage peuvent revêtir les formes suivantes :

a) Une déclaration reconnaissant que la Partie contractante n'a pas respecté ses obligations au titre du présent Accord;

b) Une indemnité compensatoire incluant les intérêts courus entre le moment où le préjudice a été causé et la date du paiement;

c) La restitution en nature, le cas échéant, à laquelle la Partie contractante peut substituer une indemnité compensatoire lorsque la restitution n'est pas réalisable; et

d) Avec le consentement des Parties au litige, toute autre forme de règlement.

B. Les sentences d'arbitrage sont définitives et exécutoires uniquement à l'égard des Parties au litige et uniquement pour l'affaire considérée.

C. La sentence d'arbitrage n'est publiée qu'avec l'accord préalable écrit des deux Parties au litige.

D. Un tribunal d'arbitrage ne peut exiger d'une Partie contractante le versement de dommages et intérêts ayant un caractère punitif.

E. Chacune des Parties contractantes doit prendre, sur son territoire, les mesures nécessaires à la bonne exécution de toute sentence d'arbitrage, conformément aux dispositions du présent article, et mettre à exécution sans délai toute sentence d'arbitrage rendue dans un litige auquel ladite Partie est partie.

F. Un investisseur peut faire appel de l'exécution d'une sentence d'arbitrage en application de la Convention du CIRDI ou de la Convention de New York.

9. Exclusions

Ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des litiges prévu dans le présent article les décisions adoptées par une Partie contractante aux fins d'interdire ou de limiter, pour des raisons de sûreté nationale et conformément aux dispositions de sa législation nationale, l'acquisition sur son territoire, par des investisseurs de l'autre Partie, d'un investissement possédé ou contrôlé par ses propres ressortissants.

Article 9. Règlement de litiges entre les Parties contractantes

1. Tout litige pouvant survenir entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé autant que possible par la voie de consultations ou de négociations.

2. Si le litige entre les Parties contractantes ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de consultations, il est soumis à un tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du présent article, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3. Le tribunal d'arbitrage est constitué ad hoc de la manière suivante : dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la demande d'arbitrage, chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal. Ces deux membres désignent un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président du tribunal, avec l'accord des deux Parties contractantes. Le président est désigné dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'arbitrage.

4. Si les délais de nomination prévus au paragraphe 3 du présent article ne sont pas respectés, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de tout autre arrangement, demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations voulues. Si celui-ci est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché pour toute autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si celui-ci est aussi un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est aussi empêché, il incombe au membre de la Cour qui suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique et n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes de procéder aux nominations.

5. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité des voix et arrête lui-même ses procédures applicables, à moins que les Parties contractantes ne s'accordent autrement. Il juge le litige conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles applicables de droit international. Ses décisions ont force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes prend en charge les honoraires de son arbitre et les frais encourus par sa représentation lors de la procédure d'arbitrage; les honoraires du président du tribunal et les autres frais sont répartis à parts égales entre les Parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage peut néanmoins ordonner une répartition différente des frais, et cette décision a force exécutoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage arrête lui-même sa procédure.

6. Une Partie contractante ne peut initier de procédures conformément aux dispositions du présent article pour un litige relatif à la violation des droits d'un investisseur, qui aurait été soumis par ledit investisseur aux procédures prévues à l'article 8 du présent Accord, à moins que l'autre Partie contractante ne reconnaisse pas ou n'exécute pas la sentence rendue pour ledit litige. Dans ce cas, le tribunal d'arbitrage, établi conformément aux dispositions du présent article peut produire, sur demande de la Partie contractante dont l'investisseur a été partie au litige :

a) Une déclaration disant que le non-respect ou la non-exécution de la sentence finale est en contradiction avec les obligations de l'autre Partie contractante, conformément aux dispositions du présent Accord; et

b) Une recommandation pour que l'autre Partie contractante reconnaisse et exécute la sentence finale.

Article 10. Exigences d'information

Nonobstant les dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent exiger d'un investisseur de l'autre Partie ou de la personne morale par le biais de laquelle l'investisseur a investi sur son territoire, qu'il fournisse des informations courantes sur cet investissement, à des fins exclusives d'information statistique. La Partie contractante protège l'information confidentielle de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la compétitivité de l'investissement ou de l'investisseur.

Article 11. Application de l'Accord

Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués avant et après son entrée en vigueur, mais ses dispositions ne s'appliquent pas aux litiges, réclamations ou différends ayant surgi avant son entrée en vigueur.

Article 12. Application d'autres accords internationaux

Si une affaire est régie simultanément par le présent Accord et par un autre accord international auquel les deux Parties contractantes auraient adhéré, le présent Accord n'empêche pas l'une des Parties contractantes ou l'un de ses investisseurs propriétaire d'investissements sur le territoire de l'autre Partie de bénéficier de tout traitement qui lui serait plus favorable.

Article 13. Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière date de notification écrite par laquelle chacune des Parties informe l'autre que les procédures requises par leurs dispositions constitutionnelles respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies. La dernière date fait référence à la date de remise de la dernière lettre de notification.

2. Le présent Accord aura une durée de sa validité de dix (10) ans et il sera ensuite renouvelé pour une période équivalente, à moins qu'il ne soit dénoncé par écrit par l'une des Parties contractantes au moins un an avant que ne se soient écoulées ces dix années.

3. S'agissant des investissements réalisés jusqu'au moment de l'expiration du présent Accord, les dispositions de l'ensemble des articles dudit Accord resteront en vigueur pendant les dix (10) années suivant la date à laquelle le présent Accord aura expiré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Montevideo, Uruguay, le trentième jour du mois de juin 1999, en deux exemplaires en langues espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour les États-Unis du Mexique :

HERMINIO BLANCO MENDOZA

Secrétaire au commerce et au développement industriel

Pour la République orientale de l'Uruguay :

LUIS MOSCA

Ministre de l'économie

PROTOCOLE

Au moment de signer l'Accord entre les États-Unis du Mexique et la République orientale de l'Uruguay relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires, à ce dûment autorisés, sont convenus d'y ajouter les dispositions ci-après, considérées comme étant partie intégrante dudit Accord.

S'agissant de l'article premier, paragraphe 1. c) :

En vertu des dispositions du présent article et pour ce qui est des États-Unis du Mexique, les prêts ne sont inclus dans la définition d'investissement que lorsqu'ils ont été octroyés par l'investisseur à l'exploitation qui constitue son investissement, ou s'ils résultent d'une opération financière d'une durée minimale d'au moins trois ans.

S'agissant de l'article 6 :

En cas de déséquilibre majeur ou de menace pour la balance des paiements, les États-Unis du Mexique peuvent restreindre temporairement les transferts lorsque sont mis en œuvre des programmes ou mesures en conformité avec les normes du Fonds monétaire international. Les restrictions sont imposées de manière juste, non-discriminatoire et de bonne foi.

